

**I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
JUSTIÇA E MEMÓRIA – I CIJUM**

DITADURAS NA AMÉRICA LATINA E NO MUNDO III

D615

Ditaduras na América Latina e no mundo III [Recurso eletrônico on-line] organização I Congresso Internacional de Justiça e Memória (I CIJUM): Universidade de Itaúna - Itaúna;

Coordenadores: Irineu Carvalho de Macedo Júnior, Regina Cândido Lima e Silva Santos e Renata Pinto Pereira - Itaúna: Universidade de Itaúna, 2023.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-5648-930-8

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: Enfrentando o legado das ditaduras e governos de matriz autoritária.

1. Direito. 2. Justiça. 3. Memória. I. I Congresso Internacional de Justiça e Memória (1:2024 : Itaúna, MG).

CDU: 34

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE JUSTIÇA E MEMÓRIA – I CIJUM

DITADURAS NA AMÉRICA LATINA E NO MUNDO III

Apresentação

Recientemente se llevó a cabo el importante evento presencial brasiliano, Congreso Internacional de Justicia y Memoria (I CIJUM), esto es, el 02 de diciembre de 2023 y que tuvo como temática: “Enfrentando el legado de dictaduras y gobiernos autoritarios”. El mismo que fue organizado por la Universidad de Itaúna (UIT), a través de su Programa de Pos- graduación en Derecho, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigación y Pos- graduación en Derecho (CONPEDI).

Es de resaltar plausiblemente la temática elegida para el mismo. Ello, en tanto que, si no se tiene memoria de lo ocurrido o no se aprende de lo vivido, lo que corresponde penosamente es, repetir los hechos acaecidos, tantas veces, hasta cuando se haya asimilado las enseñanzas dejadas por la historia.

Por ello, la historia es la ciencia que se encarga del estudio de los eventos y procesos del pasado y presente. Para esto, hace una recopilación de documentos o pruebas de los fenómenos sociales y culturales que permiten su reconstrucción y su análisis. Su objetivo principal es estudiar, indagar, comprender e interpretar lo que ha ocurrido en la humanidad, para así entender y aprender de esos hechos y por supuesto no repetir los errores que han ocurrido.

Pero quizá el elemento más significativo por el que aprender historia es importante es que esta materia ayuda a pensar. Las vueltas que han dado las sociedades desde la prehistoria hasta la actualidad han profundizado en la diversidad, en la contradicción, en el uso del poder para imponer y conocer cuáles han sido esos caminos nos ayuda a consolidar nuestro propio criterio sobre la sociedad. Algunos teóricos señalan que la historia es como una rueda de molino que siempre vuelve. Conocer nuestra identidad como personas y sociedades y encaminar nuestros pensamientos hacia esa diversidad son las claves para forjarnos un futuro mejor.

Conocer la historia no nos hará infalibles, ni evitará la reiteración de errores, ni nos anticipará el mañana; pero gracias al estudio de la historia podremos pensar críticamente nuestro mundo y tendremos en nuestras manos las herramientas para entender las raíces de los procesos actuales y los mapas para orientarnos en las incertidumbres del futuro. Desatender la historia

no nos libra de ella, simplemente regala el control. Las personas somos seres narrativos e históricos; ambos rasgos son intrínsecos a nuestra identidad.

Al hablar de historia, resulta imperativo dejar constancia, que, para entender y aprender de la misma, es preciso atender una mirada trífrente. Esto es, que es necesario abordarla desde el enfoque del pasado, del presente y del futuro.

Así, el presente evento se sitúa en el enfoque de lo ocurrido en el pasado, a efectos de aprender de ello y como consecuencia, nutrirse del aprendizaje respectivo. Dicho de manera específica: entender la historia, para no solamente no olvidarla, sino que, además, para garantizar que las dictaduras y gobiernos autoritarios, no vuelvan a repetirse o tener un mejor desempeño en rol fiscalizador de la población al gobierno de turno. Para finalmente, lograr o garantizar el abrace de la justicia.

Y es que la universidad, no solamente tiene por quintaescencia, la investigación y retribución de ciencia y tecnología hacia la población (además, de constituirse en un derecho fundamental, reconocido en la Constitución Política). Entonces, la universidad debe generar conciencia, análisis, para luego de ello, ejercer de manera inmejorable el control del Estado, a través del acertado ejercicio de los derechos fundamentales, a la transparencia y acceso a la información pública, a la rendición de cuentas, a no deber obediencia a un gobierno usurpador, a la protesta ciudadana pacífica sin armas, por citar solo algunos.

Ello, sin dejar de lado la trascendencia del método histórico en la investigación. Y es que sin investigación no existe vida universitaria, equivaldría a una estafa, a “jugar a la universidad”.

El método histórico es propio de la investigación histórica y con él se pretende, a partir del estudio y análisis de hechos históricos, encontrar patrones que puedan dar explicación o servir para predecir hechos actuales (pero nunca a corto plazo). Y se caracteriza por: i) Inexistencia de un único método histórico, ii) No genera predicciones a corto plazo, iii) Busca no solo contar la manera en que sucedieron los acontecimientos del pasado, también se centra en establecer hipótesis sobre por qué llegaron a suceder, lo que hace que muchos no consideren la historia como una ciencia al uso, ya que no establece absolutos, iv) Sus investigaciones se basan en fuentes de la época ya sean libros, documentos, diarios, enseres personales, v) Deben contrastarse las fuentes utilizadas y cerciorarse de que son realmente veraces.

Por ello, la historia se escribe constantemente a medida que vamos encontrando nuevos hallazgos. Hallazgos de los que debe quedar constancia, como expone el escritor Oscar

Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. Y Posiblemente, la razón de mayor peso para la importancia de la historia sea que, al conocerla y estudiarla, nos permite aprender a pensar y razonar por nuestra cuenta. Mientras más conocemos qué sucedió antes de nuestro tiempo, y cómo hemos llegado a la actualidad, con más argumentos contaremos para llegar a conclusiones propias con base en ello. Una habilidad que sin duda constituye un aprendizaje en diferentes aspectos de nuestras vidas.

En ese orden de ideas, deviene en imprescindible conocer, analizar la historia, para poder defender la democracia, el libre desarrollo de los pueblos, por ejemplo. Aunque, si bien es cierto, no necesariamente es lo mejor, es lo mejor que tenemos. Y los problemas de la democracia, deben ser enfrentados con más y mayor democracia.

Lo señalado no resulta ser de aplicación sencilla o menor, puesto, que por filosofía se sabe que el ser humano es marcadamente anti democrático, en vista de su naturaleza jerárquica y territorial.

En consecuencia, la relevancia que reviste el presente Congreso Internacional, cobra mayores ribetes y trascendencia.

Amerita, resaltar el rotundo éxito y tremenda acogida, por parte de conferencistas y asistentes. Es de apostrofar también, la masiva recepción de los casi 200 capítulos que formarán parte de los e- Book respectivos.

Por ello, felicitamos muy de sobremanera a los señores miembros de la Coordinación General, Profesores Dres. Faiçal David Freire Chequer, Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais, Fabrício Veiga Costa, Deilton Ribeiro Brasil y Secretaria Executiva Dres. Caio Augusto Souza Lara y Wilson de Freitas Monteiro.

Así también, expreso mi profundo agradecimiento a mi amigo, el renocido jurista, Dr. Deilton Ribeiro Brasil, por haberme extendido la generosa invitación a elaborar las presentes líneas, a modo de presentación.

Finalmente, hacemos votos, a efectos que se continúen llevando a cabo eventos de tan gran trascendencia, como el bajo comentario, con el objetivo de fomentar la investigación, mejorar el sentido crítico de los estudiantes, procurar mejores destinos y plausible evolución de los pueblos, evitar nuevas dictaduras, gobiernos autoritarios, entre otros; sobre todo, en estos tiempos en los que la corrupción se ha convertido de manera muy preocupante y peligrosa, en un lugar común.

Arequipa, a 19 de enero de 2024

JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisdom (Nigeria). Consultor jurídico. Abogado por la Universidad Católica de Santa María (Arequipa). Doctorados en Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima). Presidente de la Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia (Perú). Autor, coautor, director y codirector de más de ciento veinte libros, en diversas ramas del Derecho, desde un enfoque de derechos fundamentales e interdisciplinario, publicados en 15 países. Codirector de los Códigos Penales Comentados de Ecuador, Colombia, Chile y Panamá.

**O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE COMO INSTRUMENTO EFETIVO
PARA TUTELA DA DEMOCRACIA NOS REGIMES MILITARES NA AMÉRICA
LATINA**

**THE CONVENTIONALITY CONTROL AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT TO
GUARDIANSHIP OF DEMOCRACY IN MILITARY REGIMES IN LATIN
AMERICA**

**Luiz Antônio Da Silva Bittencourt ¹
Deilton Ribeiro Brasil ²**

Resumo

O presente artigo se propõe a investigar sobre o controle de convencionalidade que visa alinhar as leis internas dos Estados com tratados de Direitos Humanos. No contexto dos governos militares na América Latina, vítimas e seus familiares buscam justiça e reparação. A pesquisa indaga sobre a obrigatoriedade do Brasil adotar o controle de convencionalidade, à luz da jurisprudência da Corte Interamericana e do Supremo Tribunal Federal, para garantir o cumprimento de tratados internacionais. Utilizando método hipotético-dedutivo e pesquisa bibliográfica, procurou-se analisar o papel do Supremo Tribunal Federal na proteção da Democracia contra regimes autoritários na América Latina.

Palavras-chave: Controle de convencionalidade, Direitos humanos, Jurisprudência, Democracia na América Latina, Regimes autoritários

Abstract/Resumen/Résumé

The present paper aims to investigate the control of conventionality, which seeks to align the internal laws of States with Human Rights treaties. In the context of military governments in Latin America, victims and their families seek justice and reparation. The research questions the obligation for Brazil to adopt control of conventionality, in light of the jurisprudence of the Inter-American Court and the Federal Supreme Court, to ensure compliance with international treaties. Using a hypothetical-deductive method and bibliographic research, the study sought to analyze the role of the Federal Supreme Court in safeguarding democracy against authoritarian regimes in Latin American.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Conventionality control, Human rights, Jurisprudence, Democracy in Latin America, Authoritarian regimes

¹ Doutorando em Direito pela PUCRS e Universidad de Sevilla sob a modalidade de co-tutela com dupla titulação (2020-2024), com bolsa Capes Taxa. Mestre em Direito Privado pelo PPGD PUC Minas.

² Pós-Doutor em Direito pela UNIME-Itália. Doutor em Direito UGF/RJ. Professor da Graduação e do PPGD da Universidade de Itaúna-UIT e das Faculdades Santo Agostinho FASASETE/AFYA. Orientador.

INTRODUÇÃO

O controle de convencionalidade é um mecanismo que visa compatibilizar as leis internas dos Estados com os tratados de Direitos Humanos que foram ratificados por esses. Da mesma forma que ocorre o controle de constitucionalidade das leis em relação à Constituição Federal de 1988, o controle de convencionalidade da Corte Interamericana de Direitos Humanos visa à compatibilização entre as ordens e a verificação interna, quando do exercício de convencionalidade interno, que não ocorreu violação em decorrência dos tratados de direitos humanos ratificados. Assim, internamente quando da edição de leis deve ser verificada a convencionalidade e os instrumentos ratificados internacionalmente. Em âmbito internacional, quando ocorreu a violação interna, não compatibilização entre as ordens, de forma complementar a Corte Interamericana poderá se manifestar e exercer o controle de convencionalidade (Noshang; Piucco, 2020, p. 58).

Nesta perspectiva, Estados Latino Americanos como Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru e Guatemala, passaram por períodos de governos militares de exceção nas décadas de 60, 70 e 80. Neste período, diversas pessoas que se manifestavam contrárias aos atos e omissões dos governos impostos foram sequestradas, torturadas, mortas e desapareceram sem que seus familiares soubessem o que realmente ocorreu. Os familiares destas vítimas, com o término dos governos militares e quando decretadas as leis de anistia nestes Estados, iniciaram uma busca sem fim com o escopo de obter do Estado, informações sobre os desaparecidos políticos e ao final uma reparação ao dano sofrido (Noshang; Piucco, 2020, p. 58).

Busca-se responder à seguinte pergunta-problema: Indaga-se com a presente pesquisa sobre a obrigatoriedade de o Brasil proceder com o controle de convencionalidade, uma vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos em sua jurisprudência vinculante, decidiu que cada país tem o dever de aplicar os direitos contemplados nos Tratados Internacionais que forem ratificados e o Supremo Tribunal Federal desenvolveu sua jurisprudência justamente nesse sentido, de que os compromissos internacionais assumidos devem ser efetivados.

Valendo-se do método hipotético-dedutivo com a hipótese central da pesquisa sobre a obrigatoriedade de o Brasil proceder com o controle de convencionalidade e como procedimentos metodológicos com a utilização da pesquisa bibliográfica e documental, análises temáticas, teóricas, interpretativas e comparativas sobre a temática em questão.

Dessa forma, a proposta então é analisar o papel do Supremo Tribunal Federal em garantir que seja assegurado no Brasil através do controle de convencionalidade, o macro

princípio da democracia sobre interesses autoritários, principalmente o seu exercício conforme a Carta Democrática Interamericana.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O papel da Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH - na América, após duas decisões que ocorreram nos anos de 2001 (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones [art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos]. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 68; Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia del 2 de febrero de 2001) e no ano de 2006, (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. São José da Costa Rica, 2006) construí uma jurisprudência em matéria de Direitos Humanos singular para os países que estão sujeitos a sua jurisdição.

A partir dessas duas decisões paradigmáticas, a CIDH determinou que os países americanos que estão sob sua jurisdição, quando ratificarem algum tratado internacional, se obriga a harmonizar a sua legislação nacional com os direitos humanos assegurados no Tratado ratificado.

A corte, no primeiro julgamento ocorrido no ano de 2001, assim afirmou:

[e]n el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas. Esta norma aparece como válida universalmente y ha sido calificada por la jurisprudencia como un principio evidente (“principe allant de soi”; Echange des populations grecques et turques, avis consultatif, 1925, C.P.J.I., série B, no. 10, p. 20). En este orden de ideas, la Convención Americana establece la obligación de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella consagrados."

Já no julgamento ocorrido no ano de 2006 e que se apresenta como o mais importante e que precisa ser estudado dentro da perspectiva brasileira, é o ocorrido no ano de 2006. Nesse julgamento, a CIDH decidiu que todos os estados que se submetem a jurisdição da mesma esta obrigado a proceder com o controle de convencionalidade.

Para CIDH,

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones

vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. São José da Costa Rica, 2006).

E a partir dessas duas decisões, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar um Habeas Corpus em que tinha como objeto a derrogação da prisão do depositário infiel, norma fundamental do inciso LXVII do artigo 5º reafirmou o entendimento de que em face dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, onde ao ratificar a Convenção Americana de Direitos Humanos, a norma neste tratado vedava a prisão do depositário infiel, razão pela qual esse direito fundamental não deveria ser aplicado no Brasil, sendo uma norma de eficácia restrita. Sustentou o Supremo Tribunal Federal:

[...] 2. A norma que se extrai do inciso LXVII do artigo 5º da Constituição Federal é de eficácia restringível. Pelo que as duas exceções nela contidas podem ser aportadas por lei, quebrantando, assim, a força protetora da proibição, como regra geral, da prisão civil por dívida. 3. O Pacto de San José da Costa Rica (ratificado pelo Brasil – Decreto 678 de 6 de novembro de 1992), para valer como norma jurídica interna do Brasil, há de ter como fundamento de validade o § 2º do artigo 5º da Magna Carta. A se contrapor, então, a qualquer norma ordinária originariamente brasileira que preveja a prisão civil por dívida. Noutros termos: o Pacto de San José da Costa Rica, passando a ter como fundamento de validade o § 2º do art. 5º da CF/88, prevalece como norma supralegal em nossa ordem jurídica interna e, assim, proíbe a prisão civil por dívida." (Brasil. Supremo Tribunal Federal (1. Turma). Habeas Corpus nº 94.013. Relator: Min. Carlos Britto, 10 de fevereiro de 2009. DJe, Brasília, DF, n. 48, 13 mar. 2009).

E em outro julgado no Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo tema, a corte assim manifestou:

[...] diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização no ordenamento jurídico, por meio do procedimento de ratificação previsto na CF/1988, tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da

CF/1988 sobre os atos normativos internacionais, a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel (art. 5º, LXVII) não foi revogada [...], mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria [...]. Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a legislação infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também tem sua eficácia paralisada. [...] Enfim, desde a adesão do Brasil, no ano de 1992, ao PIDCP (art. 11) e à CADH — Pacto de São José da Costa Rica (art. 7º, 7), não há base legal para aplicação da parte final do art. 5º, LXVII, da CF/1988, ou seja, para a prisão civil do depositário infiel.” Brasil. Supremo Tribunal Federal. RE 466.343, rel. mim. Cezar Peluso, voto do min. Gilmar Mendes. DJE 104 de 5 jun. 2009. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2009.

Após essas duas decisões sobre a inaplicabilidade da prisão do depositário infiel, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante, a de nº 25 que afirmou ser ilícita a prisão de depositário infiel. Assim é a redação da súmula: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito” (Supremo Tribunal Federal, 2009).

Nesse sentido, a partir desses dois julgamentos da CIDH e do Supremo Tribunal Federal em relação ao depositário infiel é que se propõe a desenvolver a presente pesquisa no sentido de que, partindo da interpretação de que o Supremo Tribunal Federal construiu ante a sentença sobre a ilicitude de prisão de depositário infiel, quando sustentou que o Brasil assumiu compromissos internacionais, por isso deveria aplicar os direitos previstos nos tratados e em especial ao Pacto de São José da Costa Rica, inclusive em detrimento de um direito fundamental previsto na CF, como foi o caso da última parte do inciso LXVII do art. 5.º da CF, então, no mesmo sentido abriu-se a possibilidade para uma maior aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados no Brasil (Nahas, 2023).

A partir desses entendimentos da CIDH e da interpretação promovida pelo Supremo Tribunal Federal em relação a aplicação dos Tratados Internacionais é que se pode compreender a obrigação do Brasil em efetivar os princípios da Carta Democrática Interamericana, que reconhece “[...] que a democracia representativa é indispensável para a estabilidade, a paz e o desenvolvimento da região, e que um dos propósitos da OEA é promover e consolidar a democracia representativa, respeitado o princípio da não-intervenção” (OEA, 2001).

A Carta Democrática Interamericana foi aprovada na Sessão Extraordinária da Assembleia Geral realizada em 11 de setembro de 2001, em Lima, Peru, sendo motivada principalmente pelo fato de que quase todos os países da América Latina na segunda metade do século XX passou pelo regime autoritário, com ausência de liberdades individuais, regimes extremamente ditatoriais.

Esse documento veio no sentido de reafirmar que a única forma de governo a ser aceita e reconhecida pelos membros da OEA é a democracia, sendo um compromisso internacional de cada país, conforme art. 1º “Os povos da América têm direito à democracia e seus governos têm a obrigação de promovê-la e defendê-la. A democracia é essencial para o desenvolvimento social, político e econômico dos povos das Américas”.

A partir desse documento de singular importância jurídica, o Supremo Tribunal Federal no exercício de sua função como guardião da Constituição e com a abertura constitucional prevista no artigo 5º, §2º e tendo a prevalência dos direitos humanos como um dos princípios (artigo 4, II), a aplicação do grande princípio e direito humano que é a democracia representativa, cada dia mais o Supremo tem a incumbência de assegurar que haja equilíbrios de forças entre os poderes para manter o regime democrático, conforme compromisso assumido internacionalmente.

E de fato, onde não há liberdade individual, onde há regime ditatorial, não há pleno desenvolvimento humano e há uma falha do Estado e uma decadência da própria humanidade, pois, a democracia pressupõe consenso e capacidade de diálogo e resolução pacífica dos conflitos e diferenças.

E no Brasil, tem-se percebido que o Supremo, mesmo com todas as críticas que recebem, tem feito cumprir os princípios da Carta Democrática Interamericana, princípios insculpidos no artigo 3º:

São elementos essenciais da democracia representativa, entre outros, o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, o acesso ao poder e seu exercício com sujeição ao Estado de Direito, a celebração de eleições periódicas, livres, justas e baseadas no sufrágio universal e secreto como expressão da soberania do povo, o regime pluralista de partidos e organizações políticas, e a separação e independência dos poderes públicos.

Dessa forma, a proposta de reflexão no presente é de demonstrar que no Brasil, por determinação da CIDH, através da jurisprudência consolidada no que diz respeito a obrigatoriedade de proceder com o controle de convencionalidade, devendo aplicar no âmbito internos, os direitos consagrados nos Tratados a que tenha ratificado. Mais do que um dever, é uma obrigação a aplicação e o Supremo Tribunal Federal tem que o dever de, através dos precedentes advindos das ações constitucionais, tornar obrigatório essa observância, assegurando, sempre que o princípio da democracia deve ser respeitado acima de qualquer pretensão governamental ou de desejos pessoais de quaisquer representantes do povo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Controle de Convencionalidade surge no Sistema Interamericano de Direitos Humanos como instrumento para buscar a proteção e garantia interna de efetivação dos direitos humanos ratificados pelos Estados no cenário internacional. A compatibilização de normas internas com normas internacionais busca uma coerência entre os sistemas jurídicos e demonstra a preocupação nacional e internacional com as normas protetivas de direitos humanos consagrados (Noshang; Piucco, 2020, p. 72).

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, com a obrigatoriedade de proceder com o controle de convencionalidade, uma vez que a jurisprudência da CIDH vincula a todos os membros da Organização dos Estados Americanos deve se orientar no sentido de fazer efetivo todos os tratados internacionais que tenham sido ratificados.

Ao mesmo tempo, como guardião da Constituição Federal, como vem fazendo, deve desempenhar papel importante para assegurar que o direito humano a democracia seja assegurado a cada brasileiro, conforme Carta Democrática Interamericana, exercendo o sistema de freios e contrapesos, sendo a democracia, o maior valor no Estado Democrático de Direito nos regimes militares na América Latina.

REFERENCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Habeas Corpus nº 94.013**. Relator: Min. Carlos Britto, 10 de fevereiro de 2009. DJe, Brasília, DF, n. 48, 13 mar. 2009.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **RE 466.343**, rel. min. Cezar Peluso, voto do min. Gilmar Mendes. DJE 104 de 5 jun. 2009. Brasília: STF, 2009.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Súmula vinculante 25**. Brasília: STF, 2009

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. **Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile**. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. São José da Costa Rica, 2006. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf. Acesso em: 15 out. 2023.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. **Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones**. Sentencia de 27 de agosto de 1998. São José da Costa Rica, 1998.

NAHAS, Thereza Christina. Ampliação do catálogo de direitos fundamentais. In: MARTINEZ, Luciano; BELMONTE, Alexandre Agra; NAHAS, Thereza Christina (coord.). **Artigo 5.º da Constituição da República**: os direitos constitucionais inespecíficos aplicados às relações de trabalho. Porto Alegre: Lex Editora, 2023. p. 985-1000.

NOSCHANG, Patrícia Graziotin; PIUCCO, Micheli. O exercício do controle de convencionalidade da Corte Interamericana de Direitos Humanos nas ditaduras da América Latina. In: **Direito internacional dos direitos humanos** [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/2020 Coordenadores: Fernando Antonio de Carvalho Dantas; Jorge Cardona Llorens; Marcos Leite Garcia – Florianópolis: CONPEDI, 2020 / Valência: Tirant lo Blanch, 2020. Disponível em: <http://site.conpedi.org.br/publicacoes/150a22r2/xww0g7ht/A73lh1D552mc3783.pdf>. Acesso em: 26 out. 2023.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. **Carta Democrática Interamericana**. Lima: OEA, 2001.